



no transar

Órgano de Prensa del Partido Revolucionario Marxista Leninista

¡PROLETARIOS Y PUEBLOS DE TODOS LOS PAÍSES OPRIMIDOS... UNÍOS!

Año 24 - (3ra. época)

EDICIÓN ESPECIAL

19-07-2021

Derogación del decreto 949/20

RECUPERAR EL PARANÁ



"Hidrovia": 12 meses para seguir luchando

Pág.11

La jornada del 9 de julio en Tucumán

Pág.17

Las bases de SAMEEP no detienen la lucha

Pág.21

Junto a la Revolución Cubana

Pág.42

**¡DESPROCESAMIENTO DE VIVIANA
TOROS Y MAXI TORRES!**

Editorial

Gobierno y oposición, círculo sin pan

9 de Julio: qué festejan

Algo más de una semana pasó de un nuevo aniversario de nuestra Independencia. A lo largo de estos 205 años, aquello de ser libres “de toda dominación extranjera” nunca fue más allá de lo formal. Efectivamente, quedó atrás el tiempo de la colonia, pero la actualidad nos encuentra atados económicamente a los intereses de las potencias que se disputan nuestros recursos.

En todos estos años hubo proyectos que trataron de elaborar alternativas de soberanía, que quedaron a mitad de camino. De aquel peronismo que alguna vez se presentó antagónico de los yanquis -Braden o Perón- a este PJ, el abismo es inmenso. El actual gobierno de Fernández no vino a cambiar ese estado de cosas. El arreglo para pagarle al FMI va a llegar más temprano que tarde, luego de que las partes acordaran de hecho que hay que esperar los tiempos electorales. Esa vocación de pago se ve ratificada en el ya consumado acuerdo con el Club de París. En el tema de la mal llamada Hidrovía, patearon la pelota para adelante por un año, pero sin anular el decreto 949/20 que volverá a dejar en manos de multinacionales la principal vía navegable del país. De hecho, mientras Fer-

nández encabezaba el acto en Tucumán, la policía reprimió la manifestación impulsada por el Foro por la Soberanía que reclamaba por este tema. Nada mejor para graficar dónde está parado cada uno dos siglos después de aquel 9 de Julio.

En su discurso, Fernández se refirió a la denuncia del canciller boliviano según la cual el macrismo, en retirada del gobierno, le envió armas -municiones antidisturbio más precisamente- a la dictadura de Áñez. Días después, la ministra Frederic formalizó una demanda penal contra Macri, Patricia Bullrich y otros ex funcionarios. El hecho es gravísimo, y más allá de la posibilidad de comprobarlo



Represión tras el acto del Foro por la Soberanía en San Miguel de Tucumán

judicialmente, las explicaciones del ex embajador en Bolivia y del resto de los implicados directos son por lo menos poco convincentes. El tema es qué se hace con eso. Dejemos de lado la tentación de caer en anacronismos tales como recordar cómo castigaban los patriotas conductas parecidas, o de correr el arco con preguntas del tipo de para qué se usan las municiones antidisturbio en nuestro país -y vaya si las usaron ese día en Tucumán-. Vamos a las coordenadas actuales y veamos qué pasó con Macri a nivel de su responsabilidad con el endeudamiento que nos legó, sobradamente probado su carácter fraudulento y criminal. La convivencia con estos grados de impunidad está lejos, lejísimos de cualquier conducta mínimamente patriótica.

Por más que Fernández diga que tiene como modelos a San Martín, Güemes y Belgrano, definitivamente su proyecto no tiene nada que ver con el de los líderes de la Independencia. Hoy, en la era del capitalismo en su fase imperialista, la continuidad de ese proyecto está en la clase trabajadora protagonista de los Cordobazos: es su intervención la que hay que afirmar para avanzar en las tareas inconclusas de la liberación nacional y social.

Números que no cierran

“La campaña de vacunación es más importante que la campaña electoral”, dijo Cafiero en su informe ante los diputados. Con la vacunación desarrollándose a mayor ritmo, el Jefe de Gabinete trata de barrer bajo la alfombra una gestión de la pandemia



que ya traspasó los 100.000 muertos, expuso a la enfermedad al pueblo trabajador y exprimió más allá de lo posible a los trabajadores de la salud, para beneplácito de las grandes empresas. Y de paso, le baja el precio a las elecciones de medio tiempo.

Tiene razones para ello. El gobierno encara el debate electoral con un año y medio de malas noticias a cuestas. Sin subestimar el peso de la situación sanitaria y de la herencia macrista, lo cierto es que, con casi medio mandato recorrido, la mitad de los hogares tiene ingresos por debajo de la canasta básica, es decir que son pobres. Mala performance para pretender ratificar electoralmente. Y si bien se trata de elecciones en las que se renovarían parcialmente distintas cámaras, ya se juega con la vista puesta en la sucesión de 2023.

Esto obliga al gobierno a producir un vuelco para llegar mejor parado. En esa dirección fue la convocatoria al Consejo del Salario en la que se decidió adelantar las cuotas de aumento del salario mínimo, acortando a septiembre el plazo inicial que terminaba en febrero del año que viene: en dos meses el monto será de \$29.160. Esta suba tendrá impacto en la ayuda social, el seguro de desempleo y las jubilaciones (además del anuncio del bono de \$5.000 para quienes cobren hasta dos mínimas). Así y todo, una familia con dos integrantes que ganen el salario mínimo seguirá corriendo de atrás a la canasta básica, hoy arriba de los \$60.000. Ni hablar de los informales (un tercio de quienes trabajan), los desocupados y los jubilados. Esto con

el telón de fondo de una inflación que en el año no bajará del 40%. El gobierno quiere anunciar pan para hoy, pero lo que nos asegura es hambre -más hambre- para mañana.

Esta política cuenta con el aval de los jerarcas de la CGT. Que salgan a hablar de “mantener el valor del poder adquisitivo” o de “batalla contra la inflación” pinta toda su hipocresía. Los gremios con mayor peso podrán negociar paritarias por encima del 40%, como ya lo hicieron Bancarios y Camioneros. Pero más allá de la mejora sectorial, la lógica sigue siendo cuidar lo propio aprovechando la rosca hacia las elecciones. La salida de conjunto basada en la unidad de los trabajadores está ausente de su proyecto, además de que representan una de las principales trabas para alcanzarla. Apuntalar las experiencias antiburocráticas, que existen con mayor o menor volumen, va en dirección a resolver esta carencia para que los trabajadores vuelvan a ocupar un lugar de vanguardia en la lucha popular, como se corresponde con su historia y con la necesidad del presente.

Otra vez lo mismo

Así las cosas Juntos por el Cambio, que fue oficialismo hace menos de dos años, busca resolver sus debates domésticos para salir a posicionarse. Tarea ardua, ya que los “abanderados del diálogo” se sacan los ojos por las candidaturas como cualquier buen representante de la politiquería local. Todo el mundo invoca públicamente la unidad,

porque todos saben que corre peligro.

Acordaron en Córdoba y en CABA pero todo indica que van a internas en Provincia de Buenos Aires y en Santa Fe. La UCR no quiere volver a jugar de convidado de piedra y presiona con candidatos propios. La Coalición Cívica también quiere meter bocado, y en Neuquén van con lista propia luego de acusar de “mezquindad y miopía” a sus ex aliados. Pero el plato fuerte es la interna del PRO. El “ala dura” de Bullrich no está logrando hacer valer en el armado de listas la iniciativa política que desplegó este tiempo, la cual se viene desinflando: la última protesta “del campo” ratificó que si hay que disputar la calle y las rutas el oficialismo corre con desventaja, lo cual acumula en el sentido de su proyecto, pero sin producir un vuelco. Poco quedó, más allá de la postal de una Bullrich literalmente disfrazada de gaucho. Por otra parte, Rodríguez Larreta piensa en su candidatura a futuro y pretende poner el pie en PBA a través de gente de su gestión. Así, el “ala dialoguista” de los amarillos está encabezada por un mandatario porteño que gobierna sin atender un solo reclamo popular en una ciudad con 47% de pobres, entre quienes no se cuentan los beneficiarios del fabuloso negocio inmobiliario que se despliega a sus anchas hace años.

Con estos problemas a cuestas, pero con el inflador propio de los grandes medios, se presentan como los salvadores frente al actual gobierno. Nada más desvergonzado de parte de quienes gobernaron el país hace muy poco y mostraron de qué es-



tán hechos, empeorando las condiciones de vida del pueblo y profundizando la entrega. Retocando un poco a una Vidal aporteñada para la ocasión y presentando otros candidatos no contaminados por la función pública, la campaña de JxC se va a centrar en cómo instala a sus individuos, porque de programa, propuestas o soluciones, no pueden hablar. Por las dudas, a nadie se le ocurre que el ex presidente pueda ser candidato a nada.

De la lucha popular a un cambio de fondo

Por abajo, la preocupación no pasa por las tramas electorales. Faltan algunos meses y a medida que corra el tiempo se van a acrecentar los esfuerzos por su instalación. Pero las primeras experiencias realizadas durante junio arrojan algunos datos que, si no prefiguran una tendencia, por lo menos plantean advertencias. Tanto en Jujuy como en Misiones ganaron los oficialismos, en elecciones cuidadosamente separadas de la disputa nacional. Más allá de esta ratificación, destaca en ambos casos la sensible baja en la participación respecto de la anterior legislativa en 2017. En Jujuy fue a votar el 65% del padrón (15% menos) y en Misiones lo hizo el 59% (18% menos). Seguramente incidió en esta conducta el haber estado transitando el pico de la pandemia. Pero a ello se suma que, de los votos emitidos, en ambos casos la suma de los blancos y nulos superó el 7%.

Por el tamaño de dichas provincias, se trata de elecciones con un peso menor en el escenario na-

cional, que se define en los distritos grandes, pero que dejan planteada la posibilidad de un rechazo al circo infame que montan oficialistas y opositores; será la militancia activa la que deberá luchar por transformar esa expresión de hastío en una política que alimente la movilización popular.

Movilización que no se detiene ni con las dificultades que plantea la pandemia. Según un informe de consultoras privadas replicado en medios nacionales, en lo que va de 2021 hubo 2.472 piquetes, 60% más que en el mismo período de 2020. Sin haber hecho un estudio detallado, quienes impulsamos la pelea lo sabemos. Todas las semanas los desocupados hacen demostraciones con centro en Desarrollo Social, muchas de ellas movidas nacionales. La semana que pasó el sector salud volvió a la carga en CABA con una jornada de paro y movilización. En todo el país se desarrollan múltiples conflictos en actividades en donde las patronales descargan la crisis sanitaria sobre los trabajadores, resaltando en el último tiempo las luchas de SAMEEP en Chaco y del Ingenio San Isidro en Salta. A ello se suman las movidas en defensa de los recursos y por el medio ambiente: en esta dirección, destacó la jornada del 8/9 de julio convocada por el Foro por la Soberanía, en la que se confluyó con otros espacios que se organizan contra la entrega de nuestro río Paraná. La postal que ofreció el AMBA en estos días, con los cortes de puentes, vías de tren, rutas y calles del centro de la ciudad, suceden a escasos dos años de asumido el actual gobierno. Si las direcciones políticas que se repar-

ten el poder solo se esmeran por presentar los mejores candidatos, por fuera de la hecatombe socio productiva que se profundiza, entonces no están entendiendo nada sobre la perspectiva de rebeliones populares en ciernes, aquí y en la región. Menos aún sobre la superficialidad del régimen político, cuyo reciclado se descompone paralelamente con la crisis inalterable del capital monopólico.

La preocupación inmediata está puesta en las condiciones de vida, y el debate de fondo es cómo encarar las reformas estructurales que permitan alcanzar el bienestar del pueblo trabajador. No estará presente en la discusión por arriba cómo terminar con la entrega y el saqueo, cómo ponerle freno a la voracidad de los buitres internacionales y de los monopolios locales que viven a costa del esfuerzo popular. Desde la pelea por abajo debe instalarse el debate acerca de la necesidad de suspender el pago de la deuda externa, de nacionalizar la banca, el comercio exterior y los recursos estratégicos, como programa básico para unificar a los sectores genuinamente antiimperialistas, patrióticos y democráticos, en la construcción de un proyecto que vaya por la disputa del poder. Cuestión que no se va a resolver en el marco de estas elecciones en donde siempre ganan los mismos, sino que va a cobrar forma al calor de la construcción revolucionaria.

Agustín Damaso

Frente a la administración estatal transitoria

“Hidrovia”: 12 meses para seguir luchando

El pasado abril venció, tras 25 años de vigencia, la concesión de la vía navegable del Paraná a la empresa Hidrovia S.A., una asociación entre las empresas Jan de Nul (Bélgica) y EMEPA (Argentina) que realizaba las obras de dragado y balizamiento a cambio del cobro de un peaje. Para evitar la paralización del mantenimiento del río, el gobierno nacional estableció una prórroga de la concesión por 90 días (Resolución 129/2021) hasta julio y luego un período de 12 meses de administración estatal de la “hidrovia” a través de la Administración General de Puertos - AGP (Decreto 427/21). El organismo realizará una “licitación corta” para las obras de dragado y balizamiento y cobrará un canon al tránsito de las embarcaciones, mientras el Ministerio de Transporte prepara una licitación internacional por 12 o 15 años.

El texto del nuevo Decreto 427/2021 no anula sino que ratifica lo establecido por el tan cuestionado Decreto 949/20, donde se establecía que el Estado realizaría una nueva concesión de la administración del Paraná tras su vencimiento. En ese sentido, el período de 12 meses de control estatal es una medida transitoria para mantener la vía en condiciones navegables mientras se prepara la li-

citación internacional, objetivo de fondo del gobierno, como lo afirmó el propio ministro de Transporte Alexis Guerrera (del FR - Massa). No se trata de una acción de soberanía ni una estatización, como lo festejaron por adelantado algunos distraídos, sino de postergar una decisión tomada porque no están dadas las condiciones para avanzar.

Ocurre que la definición está atravesada por múltiples intereses, todos ellos conectados. Por un lado, en el Paraná se expresa la guerra comercial entre China y EEUU. China quiere continuar avanzando en los diversos eslabones de la cadena agroindustrial-exportadora: a la adquisición de Syngenta (semillas e insumos) y la instalación de COFCO mediante la compra de Noble y Nidera (compra de granos, producción y exportación) ahora busca sumar el control de la vía navegable a través de su empresa CCCG Shanghai Dredging, que ya realiza tareas de dragado en el puerto de Buenos Aires. De cara a esta competencia, cuenta a su favor con los vencimientos del préstamo otorgado a nuestro



Movilización al Ministerio de Transporte

país en 2014 para la construcción de represas, sobre los cuales el gobierno argentino planteará una renegociación. Por su parte, EEUU busca garantizar el predominio de las empresas norteamericanas instaladas a la vera del Paraná (Cargill, ADM, Bunge) y evitar cualquier avance chino, razón por la cual exigió que la licitación fuera supervisada por la OCDE. Ser el actor más relevante en la negociación de la deuda externa argentina, especialmente del capítulo FMI, es la carta con la que juega el gobierno de Biden.

Por otro lado, todas las empresas exportadoras -más allá de su nacionalidad- buscan abaratar el costo de los fletes. En esa dirección presionan por ampliar la profundidad y ancho del dragado, para permitir el ingreso de los barcos más grandes hasta sus puertos ubicados en los alrededores de Rosario. La adaptación del río a los intereses de las multinacionales supone un enorme costo ambiental, un peligro al suministro de agua potable, la contaminación del lecho, el deterioro de los humedales de la cuenca y riesgos de sequías, entre otros. Asimismo, el gobierno anticipó un proceso de revisión del precio del peaje, con mecanismos que contemplen la participación de las “entidades representativas de los sectores afines y obligados al pago”, uno de los reclamos de las empresas exportadoras, que consideran muy elevado el costo de la tarifa actual. Además, según palabras de Santiago Cafiero, se dará participación a las provincias ribereñas en el proceso licitatorio y en los futuros organismos de control, para contemplar los

intereses de los gobernadores y de los empresarios regionales: con ese objetivo ya funciona una Comisión Bicameral de seguimiento.

El camino de la licitación del Paraná está en sintonía con el retroceso en la expropiación de Vicentín y otras medidas: es fruto de la alianza con el complejo exportador (representado en el Consejo Agroindustrial Argentino) para atar el futuro de la economía nacional a la profundización del actual modelo: un callejón sin salida. No hay que descartar que en este camino se decida tomar control de algunos ramales ferroviarios e incluso de algunos puertos periféricos, medidas que de realizarse serán presentadas como actos de soberanía. En realidad, ello ratificaría al Estado como socio menor en el gran negocio de las multinacionales, ya que el esquema del gobierno no contempla las cuestiones esenciales que implican tocar los intereses del sector, como la estatización de los principales puertos, los más importantes en manos de ocho empresas multinacionales; la construcción de una marina mercante nacional para evitar el pago de fletes y revitalizar la industria naval; el control estatal permanente del Paraná, que permitiría la prevención del contrabando de mercancías, el narcotráfico y la evasión o elusión fiscal; o medidas más contundentes como la nacionalización del comercio exterior, que daría al Estado la propiedad y el control de los dólares generados con el intercambio comercial internacional.

La cuestión del Paraná también abrió una grieta política en el Frente de Todos a poco de las elec-

ciones legislativas: el massismo y otros sectores del peronismo más conservador apuestan por la privatización, mientras el kirchnerismo y los sindicatos guardan un silencio cómplice; pero en las bases sociales y sindicales, en las organizaciones y entre diversos referentes comenzaron a surgir voces críticas que reclaman y pelean por la estatización del Paraná.

La iniciativa desplegada por el Foro por la Soberanía, junto a otros espacios como el Frente por la Soberanía Nacional, surgidos en la pelea por la defensa del río, sirvió para terciar en el tema mediante actividades virtuales y movilizaciones en varios puntos del país, como ocurrió los pasados 8 y 9 de julio. Con la conmemoración de nuestra Independencia como eje, el jueves 8 se realizó una jornada nacional que incluyó importantes movilizaciones en distintas provincias. En Rosario, el acto en las escalinatas del Parque España, en donde los oradores hablaron sobre el modelo productivo y el saqueo, tuvo como fondo los buques de carga navegando por el Paraná. En CABA el acto se desarrolló en las puertas del Ministerio de Transporte, a metros de la Casa Rosada, y además de las fuerzas políticas y sociales, se hicieron presentes representantes de ATE Vías Navegables y trabajadores del Astillero Río Santiago. También hubo actividad en Córdoba, como parte de una jornada que culminó el propio 9 de Julio en Tucumán (ver nota).

El control estatal por 12 meses permite ganar tiempo en una disputa intermonopólica en la que el go-

bierno todavía no tiene claro sobre qué sector recostarse. En cuanto a la interna desatada en la coalición gobernante, sirve como prenda para los sectores más críticos de su política de claudicación frente a los monopolios. En este contexto intervienen las acciones de lucha y concientización, siendo el resultado de la situación de conjunto una medida que impide -por ahora- que una nueva entrega de la soberanía ocurra por debajo de la mesa, a espaldas de los sectores populares. Se abre un período de un año para profundizar la lucha, torcer el brazo del gobierno, el imperialismo y las multinacionales y lograr el control estatal de la vía navegable.

Asimismo, las políticas que exigimos sobre el Paraná deben ser parte de un plan integral de soberanía económica que avance con la nacionalización de la banca, los recursos energéticos y estratégicos, las grandes unidades productivas y los sistemas de transporte multimodales y, fundamentalmente, la suspensión del pago e investigación de una deuda externa ilegítima, fraudulenta y usuraria que ha desangrado al país por décadas. Un programa de este tipo es urgente y necesario para financiar un aumento de salarios, jubilaciones y planes sociales en dirección a un inmediato bienestar popular y social, y para romper los lazos de dependencia y establecer un sendero de industrialización y desarrollo económico.

David Paz

La jornada del 9 de Julio en Tucumán

Fue en el marco de la convocatoria del Foro por la Soberanía y el Frente por la Soberanía Nacional que el pasado 9 de Julio un puñado de organizaciones y agrupaciones en Tucumán plantearon una serie de actividades: pintar un mural, que se encuentra en ejecución; una radio abierta, que por el curso de los acontecimientos no se pudo concretar; y la realización de un acto al mediodía en Plaza San Martín exigiendo la derogación del decreto 949/20, la estatización definitiva del control y mantenimiento de la navegabilidad y los puertos del Río Paraná.

Fueron convocantes a estas actividades las compañeras y compañeros de Camino al Frente, 17 de Noviembre, La William Cook, Juventud Revolucionaria Che, CUBa-MTR y PRML. Adhirió la Asociación Bernardo de Monteagudo.

Temprano se realizó la concentración en el Parque 9 de Julio, fuertemente custodiada por las fuerzas de seguridad que amenazaban cerrar el paso. Con la decisión de avanzar hacia el destino previsto, la columna comenzó su marcha, con más de 700 compañeros cumpliendo el protocolo de pandemia. Con la irrupción de infante-

ría, comenzó una represión que incluyó balas de goma y palazos que dejó varios heridos -algunos debieron ser llevados al hospital- y algunos demorados. Al mismo tiempo, en que en otro punto se movilizaban ruralistas que no recibieron el mismo trato.

A pesar de la represión, los manifestantes se reagruparon y en la propia plaza realizaron el acto y leyeron el pronunciamiento acordado.

Mientras el presidente Fernández señalaba a Macri por las armas enviadas a Bolivia para reprimir al pueblo, su acto era custodiado por el anfitrión Manzur que alejó a palo y bala de goma el reclamo por hacer efectiva la soberanía sobre nuestros recursos. Toda una definición de qué valor le dan a la Independencia. La movilización recolectó la solidaridad de las organizaciones que integran el Foro por la Soberanía y el Frente por la Soberanía Nacional, además de otros espacios como el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Pero lo más valioso de la jornada, plantó el eje de la defensa del Paraná frente a las multinacionales y amplió la proyección nacional de la jornada que había comenzado el día anterior en varios puntos del país. Un importante avance en la lucha por una patria verdaderamente soberana.

Ricardo González

Pronunciamiento leído el 9 de Julio en Tucumán

Aquí en San Miguel de Tucumán, donde un 9 de Julio de 1816, proclamamos al mundo nuestra decisión de independizarnos y construir una nación políticamente libre de todo yugo extranjero, soberana en sus decisiones políticas.

Aquí donde un 9 de Julio de 1947 se declaró la independencia económica, como forma de ejercer plenamente soberanía sobre todo el territorio continental, insular y antártico; como base para poder instaurar justicia social, garantía de relación pacífica y solidaria de todos quienes habitamos el territorio de la República.

Fue entonces que las banderas de Soberanía Política, Independencia Económica y Justicia Social se alzaron, insinuando la posibilidad histórica de convertirse en patrimonio inalienable de nuestros pueblos en su lucha por llevarlas a la victoria sobre el poder de los monopolios y el imperialismo.

Vemos hoy con dolor, a la patria mal herida en sus aspiraciones, producto de traiciones y claudicaciones de quienes perdieron el rumbo de la historia y, gestión sobre gestión, han construido un andamiaje firme de dependencia, cuyo único destino es miseria para nuestros pueblos y saqueo a las riquezas de la nación.

A vista de estas consideraciones, dado el abandono hecho a estas históricas banderas que acompañaron nuestras heroicas luchas como pueblo y nación.

Estamos hoy aquí en uso de facultades extraordinarias, investidos de voluntad soberana, en el puñado de agrupaciones y organizaciones que acompañan este acto, asumiendo responsabilidad plena en este nuestro Pronunciamiento: Declaramos solemnemente ante nuestros pueblos y la patria americana, que es voluntad de nuestras organizaciones, asumir la defensa de dichas banderas, de la mano de una Democracia Revolucionaria que haga posible verlas flamear bien alto.

Que manifestada como queda esta voluntad, concurrirémos al llamado a la más amplia unidad antiimperialista, disponiendo y arbitrando todo lo imprescindible y necesario a fin de garantizar el triunfo de nuestros pueblos y gran nación, sobre nuestros enemigos jurados de ayer de hoy y de siempre, los monopolios, el imperialismo y sus lacayos serviles. Por eso nos plantamos firmes en la convicción de luchar por la suspensión inmediata del pago y la investigación de la ilegítima deuda externa. Por la nacionalización del comercio exterior y la definitiva estatización de nuestro río Paraná. Por la inversión de esos recursos en un plan de reindustrialización nacional que permita combatir de frente la desocupación, pobreza y miseria en que nos vienen hundiendo.

¡SOLO ASÍ HABRA PATRIA PARA TODOS!
¡HASTA LA VICTORIA!
¡VENCEREMOS!

Firmas: Camino al Frente - 17 de Noviembre - La William Cook - Juventud Revolucionaria Che - CUBa-MTR - PRML

Desde las bases los trabajadores de SAMEEP no detienen la lucha

Reproducimos la declaración de la Regional Chaco de nuestro partido del 15 de julio, en relación a la lucha en la empresa de agua y mantenimiento.

Desde hace una semana trabajadores de la empresa realizan medidas de fuerza. Las principales demandas son:

- El blanqueo de empleados adscriptos que pese a estar trabajando diez o doce años en SAMEEP su dependencia laboral es otro organismo. En la actualidad estos 592 trabajadores realizan igual tarea que sus compañeros del resto de la planta pero lo hacen con menos salario y en condiciones de precariedad.

- El pago adeudado al ítem "Calificación" que compone el sueldo de los empleados de SAMEEP. El gobernador Capitanich y el directorio de la empresa se habían comprometido a saldar en febrero pasado. Son \$ 250 millones que deben a los trabajadores por ese concepto.

Estas situaciones irregulares por la que atraviesan trabajadores de la empresa venían siendo planteadas por todos los sindicatos del sector. Inclusive se llegó a firmar un acta acuerdo con las autoridades de la empresa donde se comprometían a dar respuesta a un pliego con 15 puntos, pero al cabo de un tiempo todo quedó en la nada y solo SOSCH (Sindicato Obra Sanitaria del Chaco) mantuvo la protesta.

¿Qué ocurrió en el medio?

Desde marzo de este año a SAMEEP la preside Leonardo Aguzín, tras el desplazamiento del ingeniero Pablo Sánchez que había asumido al inicio del actual mandato de Capitanich. Sánchez era personal de planta y un profesional de izquierda, que había generado expectativas ya que como trabajador conocía la precarización laboral y el vaciamiento en la empresa. Fue remplazado por un ingeniero químico que viene de cumplir funciones en la industria cervecera, evidenciando así un cambio de idea del gobernador.

Aguzín pactó un acuerdo paritario de 15% con la mayoría de los gremios de SAMEEP, pacto del que no participó SOSCH y del que directamente este sindicato no fue convocado, a sabiendas de que rechazarían y que pondrían sobre la mesa de negociación el acta acuerdo de noviembre del año pasado con las demandas incumplidas, igual de urgentes ya que repercuten en el salario y las condiciones de trabajo.

En SOSCH es de donde los trabajadores en pie de lucha se organizan y en el que todos estos días movilizaron y realizaron cortes en calles y accesos a los obradores, definieron en asamblea las for-



mas y los métodos para que sean escuchados con fuerza los reclamos ante las autoridades

Desde que iniciaron las medidas de fuerza la respuesta de las autoridades de la empresa fue de ataque y persecución. Primero el presidente quitó el cargo en el área en el que desempeña su tarea como empleado a Daniel Tabares - Secretario General del sindicato- y ahora prevé avanzar en sancionar a los trabajadores que ascendieron a las torres que sostienen tanques en modo de protesta. Fue en el marco de este plan de lucha que los trabajadores, para demostrar a lo que son capaces de exponerse para que le reconozcan derechos, ascienden a las torres para extremar la protesta.

Al día de hoy el gobernador Capitanich y el directorio de la empresa no aceptan los pedidos y desconocen la protesta, que suma más trabajadores. Hoy habían definido bloquear el ingreso a las principales oficinas de la empresa pero por orden del presidente no entró nadie a trabajar, solo una patota que lo custodia. Fue así que los trabajadores en pie de lucha decidieron acercarse a los trabajadores que llegaban al lugar y difundir en improvisadas asambleas la situación.

La lucha de SOSCH en SAMEEP tiene lugar en días en que el anuncio que hizo el gobierno de aumento salarial para el segundo semestre destinada a todos los empleados públicos (18%) gana titulares de diarios y página de noticias locales, pero bajo los anuncios y la propaganda la realidad de los trabajadores de la provincia es otra y en una olla popular de algún corte que están llevando

adelante uno se puede enterar. La política salarial del gobierno provincial cuenta con la aprobación de sindicatos fuertes como UPCP. Solo ATE manifestó un rechazo. Pero es en la lucha de SOSCH la pared con la que choca la política del gobierno. El contexto de emergencia por la pandemia y una realidad económica con subas de precios de la que no hay salario que aguante, y que se suman a la falta de acceso a salud y vivienda, motoriza el combativismo de SOSCH, como así el antecedente que significó la muerte de 6 operarios -la mayoría jóvenes- por falta de seguridad en sus tareas al ingresar a posos cloacales en julio de 2017. Desde allí la pelea es otra en las bases de los trabajadores de la empresa estatal, que funde unidad con otros trabajadores de extracción estatal y el movimiento de trabajadores desocupados y su juventud.

Llamamos a todas las organizaciones sociales, sindicales y políticas a no abonar la idea de adormecer la fuerza de los trabajadores sino a unirse y llenarla de solidaridad con la convicción de que las conquistas son resultado de la pelea en el escenario de las calles. Como los docentes en marzo donde sus bases forzaron a su dirigencia a no acordar tempranamente. Las definiciones en favor de los trabajadores no se dirimen en una oficina o el recinto de la legislatura sino parando, ocupando y bloqueando. En los cortes está el enfrentamiento directo a la política de miseria de bajos salarios y precarización laboral, de falta de vivienda, salud y educación.

PRML-Chaco

La lucha en el Ingenio San Isidro

La lucha de los trabajadores del Ingenio San Isidro, ubicado en el departamento de Güemes en Salta, se remonta al año 2018, cuando el Grupo Gloria -hasta ese momento dueño del ingenio- se declaró en quiebra y utilizó el procedimiento preventivo de crisis para despedir a todos sus trabajadores y pagarles solo el 50 % de la indemnización. Fueron 756 familias que quedaron sin ningún ingreso. Entre los despedidos figuran los miembros de la Comisión Directiva del Sindicato (SOEASI) y todos los delegados de la planta.

En ese mismo año el Grupo Gloria vendió el ingenio a otro conglomerado de empresas, entre ellas al Grupo Ruiz de Tucumán, que retomó las actividades y recontrató solo a 370 trabajadores. Sin respetarles la antigüedad y con contratos que duran 6 meses.

Pasaron tres años y aún no pueden cobrar lo que se les adeuda. Los empresarios, en complicidad con el gobierno provincial de Gustavo Sáenz -así como antes con Urtubey- fueron dilatando las negociaciones y el pago de las indemnizaciones con la mentira de que “si pagan el ingenio debe cerrar”. Y la propuesta que pusieron sobre la mesa a través del ministro de Producción y Desarrollo Martín de los Ríos (presidente del PRO en Salta) es dar 13 hectáreas para que se repartan entre los trabaja-

dores lotes de 10 x 25 mts con un valor aproximado de 250 mil pesos. Esto cubriría, según el gobierno y la patronal, el pago de las indemnizaciones que van de los 400 mil a 3 millones de pesos por cada trabajador según su antigüedad, muchos con más de 10 años.

Esta propuesta causó malestar en los trabajadores despedidos que vienen reclamando de diferentes maneras para que se les pague lo adeudado. Es por eso que los primeros días de julio se movilizaron y cortaron la ruta 34 y el acceso al ingenio. Los cortes duraron desde el 5 al 7 de julio. La respuesta del gobierno fue militarizar el ingenio para defender los intereses de la patronal.

CUBa-MTR estuvo presente junto a los trabajadores despedidos, porque la unidad de los trabajadores y el pueblo en su conjunto debe ser una demostración de fuerza para oponernos a los ajustadores y vaciadores, para acabar con estas políticas de hambre a las que son sometidos los trabajadores azucareros.

Seguimos acompañando a los trabajadores, difundiendo la solidaridad con su pelea y haciéndonos presentes en las medidas de lucha, para lograr que sus demandas se vean resueltas y para ponerle un freno a la prepotencia patronal.

Corresponsal

Chaco

Plenario provincial de la CUBa-MTR

Se realizó el 10 de julio en la ciudad de Resistencia el plenario provincial de la CUBa-MTR, que se llevó adelante en el Centro Social Cultural y Deportivo Javier Torres. Con referentes de las localidades de la Isla del Cerrito, Barranqueras, Fontana, Vedia, Pinedo, Machagai, Sáenz Peña, Avía Terai, Castelli y Las Breñas, más las y los anfitriones de la capital, transcurrió desde las 10 de la mañana hasta las 17 un ameno y participativo análisis sobre la situación por las que atraviesan los distintos lugares de la provincia.

El plenario se desarrolló con las presentación de las delegaciones y luego cada localidad informó sobre las necesidades de trabajo, tierra, viviendas y alimentos. Se coincidió en que la situación no da para más. Se profundizó sobre los recursos naturales que posee la provincia que producen ganancias que se quedan unos pocos, a la par que las políticas no contribuyen a su cuidado y sí al extractivismo y muerte de nuestros suelos.

Luego del análisis de la situación de cada localidad, se conformaron comisiones para compartir experiencias de lucha y organización. Se resolvió realizar un petitorio que se puso a consideración

y fue votado por unanimidad, sumando un plan de lucha que comenzó este miércoles 14 de julio con movilizaciones en cada intendencia para su presentación, como así también al gobernador. Concluyó el plenario con un fuerte grito de ¡Arriba las y los que luchan, hasta la victoria siempre!

Corresponsal

Educación

Camino a la nueva LES: algunos primeros esbozos

En marzo pasado, Alberto Fernández hizo el llamado a discutir una nueva ley de educación superior. Esto, si bien no vino acompañado con un proyecto de ley oficial, marcó el inicio de los debates en la comisión de educación de la Cámara de Diputados y el armado de comisiones en el Consejo Interuniversitario Nacional y el Consejo de Rectores de Universidades Privadas. A la par, el Ministerio de Educación comenzó a poner en marcha una serie de iniciativas que marcan el rumbo de la agenda universitaria.

Es de señalar que la Ley de Educación Superior regula tanto a las universidades nacionales, como a las universidades privadas e institutos terciarios. La LES vigente fue sancionada durante el menemismo, con dos modificaciones realizadas a finales del mandato de Cristina Kirchner en 2015: la

concepción de la educación como un derecho y no como un servicio y la consagración del ingreso irrestricto. Ambas modificaciones, realizadas como un manotazo electoral, tuvieron más carácter declarativo que otra cosa. En los hechos los ingresos continúan teniendo cupo en facultades como las de Medicina o contienen grandes filtros como el CBC en la UBA, mientras que el arancelamiento continúa en marcha.

En general, lo que el gobierno nacional plantea es un acuerdo federal educativo con tres ejes centrales: la reforma en la educación superior, en la formación docente y en el financiamiento educativo. Estos ejes, que implicarían tres proyectos de ley distintos, a grandes rasgos apuntan a la misma dirección y siguen los lineamientos formulados por la UNESCO para la región. La hibridación del sistema educativo apuntando la formación a distancia, la flexibilización de la enseñanza y la preparación para los “empleos del futuro”. Lo que en palabras coloquiales implica la sintonización de la educación de todos los niveles con las necesidades del mercado laboral. Formación de mano de obra poco calificada y barata, que pueda ocupar e incluso inventarse -como la llamada economía popular- puestos de trabajos precarizados, informales y poco remunerados. Paradoja la del sistema en el que estamos inmersos en donde, la educación del futuro que venden como “innovadora”, es la reducción de la formación académica a talleres de oficio. Ahora lo central en el área educativa pasa por el desarrollo de las llamadas “habilidades

blandas” de cada estudiante, que no son más que un cúmulo de aptitudes que califican las grandes empresas como positivas a la hora de seleccionar trabajadores.

Con respecto a las universidades nacionales, las posturas que se vienen sosteniendo entre los rectores y el propio secretario de Políticas Universitarias, son los mismas que marcó el Banco Mundial en 2017 cuando planteaba los cambios a realizar en materia de educación superior en los países de América Latina y en particular en nuestro país: flexibilizar las carreras de grado, apuntando a la formación de trayectos más cortos, reemplazando así las carreras de grado por “bachilleres universitarios” a través de los créditos académicos; la flexibilización de la división de las áreas de enseñanzas, apuntando a la formación de consorcios de universidades; y la profundización de la educación a distancia propiciando la hibridación definitiva del sistema de enseñanza. La consecuencia directa de esto es el traslado de contenidos que actualmente son parte de las carreras de grado, a la formación especializada que está arancelada.

En síntesis, una reforma educativa que viene a profundizar el modelo planteado por la LES mememista, inspirada en el acuerdo de Bolonia. De hecho, parte de estas reformas ya fueron puestas en marcha durante el gobierno de Macri y Argentina se comprometió a adoptarlas en la CRES del 2018. La sanción de una posible ley que plasme legalmente el proceso en marcha y apuntale a su continuidad en el futuro, es un guiño a los orga-

nismos internacionales de crédito en el marco de la renegociación de la deuda externa. Si vemos el caso de Ecuador puede servir para pensar la propia coyuntura nacional, más allá de las grandes diferencias entre los sistemas educativos. El gobierno de Lasso, siguiendo lo pactado con FMI al reestructurar la deuda, dentro del paquete de reformas que está impulsando, lanzó un proyecto de reforma de la ley de educación superior que ya viene siendo foco de movilización entre docentes y estudiantes del país.

Las aulas híbridas

Hace unas semanas el ministro Trotta, en el marco del plan de Virtualización de la Educación Superior, anunció el impulso de las aulas híbridas, un sistema bimodal de enseñanza que alterna la virtualidad y la presencialidad en las universidades nacionales. Este proyecto, que se propone sostenerse más allá de la pandemia, viene en sintonía con las decisiones individuales de varias universidades en el último tiempo. El consejo superior de la Universidad Nacional de Rosario, por ejemplo, aprobó en junio un proyecto que regula -postpandemia- la posibilidad que cada cátedra opte por dar clases e incluso tomar parciales de manera presencial o virtual. Más allá de los debates pedagógicos en torno a la virtualidad, el problema sigue siendo el mismo que hace un año: se anuncia que la virtualidad llegó para quedarse, pero se sigue sin plantear una solución al problema material de

acceso digital.

Esto es un tema central si tomamos en cuenta que -con o sin virtualidad- los datos sobre la deserción universitaria son demoledores. Según el presidente de la CoNEAU, Néstor Pan, solo en el conurbano bonaerense la tasa de deserción ronda entre el 50% y el 60% en el primer año. Mientras que a nivel nacional solo el 22% de los/as estudiantes logran egresarse. Esta situación, preexistente pero agravada con la pandemia requiere de medidas concretas para garantizar la permanencia.

En este último punto hay un debate. Para el CIN y el Ministerio de Educación el problema de la permanencia es un problema de rigidez, que se soluciona con la mera flexibilización y certificación de los conocimientos adquiridos. Esta línea de pensamiento queda más clara con el objetivo planteado por el rector de la UNC Hugo Juri: “la universidad tiene que competir con los cursos digitales de seis meses que hace Google o Amazon que valen lo mismo que un egresado de una carrera de grado”. O sea, las carreras de grado del futuro son lo que hoy conocemos como cursos de oficio. En esta dirección apuntan la formación por parte de la UNC de las llamadas “universidades populares” y la construcción del Campus Norte en el interior de Córdoba.

Mientras tanto se desconoce el rol del presupuesto educativo para garantizar la permanencia y el egreso. Si tenemos en cuenta que la gran mayoría de quienes acceden a la formación universitaria son jóvenes y que justamente es la juventud uno de

los sectores más afectados por la crisis económica, la deserción es un hecho. Allí tienen que estar un cúmulo de políticas públicas que hoy lejos están de alcanzarse. Desde dispositivos y conexión gratuita, hasta un Progresar con un monto que no sea miserable y no tenga restricciones, como así también garantizar insumos básicos para poder estudiar. Todo esto, en el marco de un plan que también garantice salarios acordes a los y las trabajadoras, que durante este año y medio solo vieron pisotearse sus derechos laborales.

Educación superior ¿para quién?

El problema de la educación superior sigue siendo su orientación. Hoy la producción del conocimiento científico, en su gran mayoría, apunta a incrementar las ganancias de monopolios y multinacionales. Por eso el lobby es la característica central del sistema universitario argentino. Las reformas hasta ahora planteadas vienen a profundizar el saqueo y la entrega de nuestro país. Entonces, discutir una nueva ley de educación superior, no es solamente una cuestión de financiamiento. Implica discutir el proyecto de país y la necesidad inmediata de un cambio revolucionario. En ese marco, es menester no perder de vista los planes educativos de la actual gestión y su relación con la crisis en marcha. No se trata solamente de defender la educación pública, sino también de ponerla en tensión y discutir su orientación.

Martina Bas

La formación docente, otra vez bajo ataque

Los ataques a la formación docente - y a los profesorados en particular- no son algo nuevo. Hace años que desde diferentes gobiernos vienen intentando variadas estrategias para cerrar a los terciarios. En el 2012 lo hicieron con la homologación de diseños curriculares nacionalmente. Gracias a una feroz lucha se logró frenar dicho plan aunque de todas maneras se sufrieron modificaciones impuestas. Luego, en CABA durante el año 2018, se intentó cerrar los 29 Institutos de formación docente con el fin de sustituirlos por la UniCABA. A partir de una gran pelea se mantuvo a los terciarios en pie, aunque la ley fue votada en la Legislatura y la UniCABA se creó bajo el nombre de Universidad de la Ciudad de Buenos Aires. La coexistencia de la UniCABA con los terciarios buscaba desaparecerlos paulatinamente, por lo cual no fue sorpresa que este año el gobierno de Larreta aprovechara la pandemia para querer imponer nuevas medidas que abonen a esa muerte agónica de los profesorados. A través de la Unidad de Coordinación del Sistema de Formación Docente (UCSFD) a cargo de Emmanuel Lista, informó sobre tres ataques. El primero es que se pondrán restricciones para la inscripción de ingresantes a los terciarios en el segundo cuatrimestre, a la par que promocionan fuertemente la inscripción en la UniCABA. El segundo

es que se quieren intervenir los cursos de ingreso unificándolos todos en uno impuesto por el gobierno, sin tener en cuenta la especificidad de los niveles de formación (para docencia en inicial, primaria y media) ni las carreras (idiomas, ciencias, etc.). El último es su intención de reformar los postítulos, modularizándolos, restándoles puntaje y quitándoles valor. Esto último no extraña teniendo en cuenta que año a año intentan cerrarlos para beneficiar postítulos y cursos pagos. El caso más indignante es el postítulo de Educación Sexual Integral que se lleva adelante en el ISP Joaquín V. González, altamente reconocido y que año a año sufre recortes en las vacantes: en 2021 sólo se abrieron 100 vacantes siendo casi 2000 los postulantes inscriptos. Estos ataques avasallan las autonomías institucionales buscando destruir la formación docente para destinarle menos presupuesto.

Como si esto fuera poco, a partir de una nota en el diario Clarín publicada el 14 de junio de este año (“El gobierno prepara una ley para mejorar y reformar la formación de los docentes”), se cita al ministro de Educación Trotta expresando su intención de debatir en el Congreso una ley para buscar un “cierto umbral de calidad en la formación de nuestros maestros.” Pareciera tener algunas similitudes con su par en CABA, la ministra Acuña, al poner su foco para solucionar los problemas en la educación en cómo se educan los docentes, olvidándose del cada vez más pobre presupuesto educativo, la infraestructura y condiciones edilicias, laborales y el triste salario docente. No extraña dado el pron-

tuario de este ministro que constantemente acordó con Larreta la vuelta a la presencialidad en plena pandemia, siendo responsable de las hasta ahora 109 muertes de docentes evitables por Covid-19. Desde los terciarios se acepta la necesidad de innovaciones. Pero para que se logre una formación docente basada en las necesidades del pueblo es necesario por un lado que sean los reales actores de la educación quienes construyan esas propuestas y a su vez un presupuesto que realmente permita llevar adelante ese modelo educativo. Es necesario avanzar con asambleas en cada Instituto y asambleas inter-terciarias que permitan ampliar la participación de estudiantes y docentes. Así se podrá construir por el camino de la unidad la organización necesaria para enfrentar estos ataques y defender la formación docente a través de la lucha, saliendo de la parálisis en la que tanto la Coordinadora de Estudiantes Terciarios (CET) como el CESGE (Consejo de Educación Superior de Gestión Estatal) tienen inmersos a los terciarios.

Jacinta Grey

Talleres "Juntas nos hacemos fuertes" concluyen muy buenas experiencias

El curso de formación "Juntas nos hacemos fuertes" destinado a mujeres militantes de la CUBa-MTR y a compañeras de los barrios en donde la organización hace pie, se viene desarrollando en distintos lugares del país con el objetivo de impulsar en el territorio espacios de debate e intervención popular para frenar y combatir la violencia por motivos de género, desde una perspectiva crítica y de clase.

Las experiencias ya se desarrollaron con muy buena perspectiva en Rosario y en CABA y está en curso el taller en La Matanza- PBA. Próximamente esperamos continuar con los encuentros en el centro y norte del país.

Hasta el día de la fecha y de la mano de encuentros presenciales con protocolo en donde fuera posible y otros virtuales, los talleres se llenaron de debates y participación de mujeres que vienen interviniendo en la lucha popular en primera línea por trabajo genuino, alimentos, salud y vivienda digna, a lo que se suma este espacio de formación política, que en palabras de las compañeras, es muy importante y enriquecedor.

Experiencias como la de Rosario comenzaron en un barrio y terminaron con una jornada abierta a distintos barrios de la ciudad donde se pudo trans-

mitir la experiencia de cómo nos transformamos en estos encuentros, sumándole la invitación a replicarlo en cada lugar con las ganas de las compañeras de transformar en militancia cada uno de los aprendizajes que dejó el taller, con la convicción, al igual que en los talleres realizados en CABA, de que Juntas Nos Hacemos Fuertes, para luchar por nuestros derechos y acabar con toda forma de opresión y explotación.

Como dijimos en ediciones anteriores, la violencia de género siguió calando hondo en nuestra sociedad ante la ausencia de políticas públicas a largo plazo y con presupuesto acorde a las necesidades actuales y donde el contexto de crisis agudizada por la pandemia desnudó la precariedad total de la vida, donde la violencia hacia las mujeres se profundiza ante la falta de oportunidades.

Por eso, estos espacios se hicieron necesarios para lograr capacidad de respuesta en nuestras luchas. Los contenidos que se abordan van desde el análisis de la sociedad de clases donde la violencia principal es la que ejerce la gran burguesía aliada al imperialismo contra el pueblo todo, hasta comprender la violencia machista y la necesidad de erradicarla de nuestras filas para construir la unidad del pueblo contra el enemigo común, pero también para que la organización continúe fortaleciendo la formación en la pelea política, apuntando a la responsabilidad del Estado y los gobiernos por la falta de respuesta a las cientos de mujeres que en el día a día necesitan una ayuda concreta para salir de la situación de violencia machista que se

cobra la vida de una mujer por día en nuestro país. Con este empuje seguiremos adelante para llegar a ciento de compañeras y seguir creciendo por el camino rebelde y combativo.

Julia Quinteros y María Ocampo

45 años de la Noche del Apagón

Bajo la dirección de la familia Blaquier, Ledesma es sinónimo nacional de azúcar y de papel, con importante presencia en rubros como frutas, jugos cítricos, carne, cereales y en la producción de bioetanol. Integra con empresas como Arcor, Techint, Aluar-Fate, Molinos, Aceitera General Deheza (AGD), entre otras, junto a multinacionales como Cargill, Monsanto, Fiat, Ford, etc., y sectores de la banca financiera internacional, la crema de la clase dominante del capitalismo dependiente argentino. La familia Blaquier siempre supo acomodarse con el poder de turno. En la década del 60' apoyó la dictadura de Onganía, y se benefició de las políticas de concentración monopólica. Uno de los integrantes de la junta militar que derrocó a Illia, el brigadier Teodoro Alvarez, formó parte del directorio del Ingenio Ledesma. Participó activamente en la preparación del golpe de marzo del 76', a través

del llamado “Grupo Perrioux” —debido al nombre del abogado Jaime Perrioux— y que se reunía en el “Club Azcuénaga”, en realidad una propiedad del propio Blaquier que tenía en la calle Azcuénaga, de CABA. Martínez de Hoz, junto a Blaquier y Juan Aleman —secretario de Hacienda de la dictadura- integraron la entidad patronal del Centro Azucarero Argentino.

Durante el gobierno de los Kirchner, Bio Ledesma S.A., reciente emprendimiento del grupo, fue beneficiada con la cuota principal de producción de bioetanol destinada al corte de las naftas. Federico Nicholson, hombre de confianza de Carlos Blaquier y representante del grupo en la Unión Industrial Argentina, integró la delegación empresaria de Cristina Kirchner en más de una oportunidad.

Durante la presidencia de Mauricio Macri, la familia Blaquier-Arrieta, emblema de la oligarquía azucarera, fue beneficiada con la ampliación del cupo



Placa conmemorativa en Libertador Gral San Martín- Jujuy

para la producción de bioetanol y la reducción de impuestos para la exportación, medidas que aumentan aun más sus ya exorbitantes ganancias que Ledesma S.A.A.I. supo llevarse con pala durante más de cuatro décadas.

La historia del grupo Ledesma, la mayor empresa azucarera del país, es un amasijo de riqueza, explotación, persecución y muerte. Por eso hoy, al conmemorar los 45 años de las Noches de los Apagones, se agranda la experiencia de un puñado de militantes de Vanguardia Comunista, encabezados entre otros por Jorge Weisz y Carlos Patrignani, junto a tantos trabajadores y luchadores populares como Luis Arédez, que desafiaron el poder y el odio oligárquico para levantar una revolucionaria experiencia de clasismo sindical y unidad popular. Hoy el PRML, continuidad histórica de Vanguardia Comunista, participa de manera militante de esta conmemoración y, reafirma su compromiso y lucha por una Argentina libre, antiimperialista, verdaderamente democrática y popular, y en camino al socialismo.

Corresponsal

Junto a la Revolución Cubana

Reproducimos la declaración de nuestro partido publicada el 14 de julio, día en que formamos parte de las movilizaciones en la Embajada de Cuba en Buenos Aires y en el resto del país, en apoyo a la Revolución Cubana y contra las provocaciones de la gusanera y los reaccionarios locales que la acompañan.

Este domingo 11 de julio, algunos grupos de cubanos salieron a manifestarse en distintas localidades de la isla. Esto, que en cualquier otro país del continente forma parte del paisaje cotidiano, al suceder en Cuba, ha suscitado una cobertura mediática instantánea. En ningún caso las concentraciones superaron las 500 personas, aunque son las primeras movilizaciones de protesta en un cuarto de siglo. Desde 1994 -en pleno período especial-, no había convocatorias callejeras para reclamar al gobierno.

Los reclamos están vinculados al faltante de alimentos, medicamentos e insumos varios, que están agravándose en los últimos tiempos. Referirse a la economía cubana o a sus problemas de abastecimiento de insumos básicos sin tener presente en primer lugar el bloqueo criminal al que viene siendo sometida la isla desde hace sesenta años por los Estados Unidos, no es serio. Pero además, hay que tener presente por un lado las 243 medi-

das unilaterales que tomó el gobierno de Trump, profundizando el bloqueo contra Cuba, las cuales mantienen plena vigencia con el gobierno de Biden. Recrudescimiento de las medidas restrictivas, de las sanciones a quienes comercien ciertos artículos con el gobierno cubano, persecución financiera contra el sector energético, entre las más relevantes.

Por otro lado, la profundización de las dificultades propias del contexto generado por la pandemia que, si en cualquier país del mundo ha sido determinante, en la situación de Cuba es feroz. La economía cubana se contrajo un 11% en 2020, lo que no ocurría desde el período especial de los 90. El sector económico más afectado en todo el mundo -el turismo- es la columna vertebral de la economía y de la entrada de divisas en Cuba, y los efectos son lapidarios. La cosecha de azúcar -en parte debido a la escasez de combustible y de repuestos para las maquinarias- también está en un piso histórico. Sin divisas y trabado el acceso a combustibles e insumos de la producción, está la mesa servida para una crisis económica de pro-



Acto frente a la Embajada de Cuba

porciones.

En materia sanitaria, a pesar de la vigencia de uno de los mejores sistemas de salud pública del mundo, los efectos de la combinación entre bloqueo y pandemia se están haciendo sentir. El faltante de medicamentos y de insumos para la producción y aplicación de vacunas es crítico. Aún así, Cuba sigue siendo un ejemplo en el manejo de la pandemia: 136 muertos por millón de habitantes, frente a los 1800 de EEUU o los 2200 de Argentina. Y como si esto fuera poco, su población está siendo vacunada con las dos vacunas de producción estatal propia, caso único de soberanía e independencia científica y sanitaria en América Latina.

Tanto la falta de acceso a medicamentos y alimentos, como el deterioro general de los ingresos populares, fruto de la reciente reconversión monetaria que ha implicado en los hechos una devaluación forzada de la moneda, son razones legítimas para explicar un descontento que evidentemente existe. Sin embargo, este escenario viene siendo aprovechado por intereses que no tienen nada de legítimo, y que buscan desestabilizar al gobierno y la Revolución, apelando a un libreto que ya se ha aplicado en numerosas ocasiones en varios países del mundo. La apelación a una incipiente “crisis humanitaria” por parte de personeros del imperialismo yanqui y la reacción continental, ONG’s financiadas desde Miami y medios de comunicación monopólicos, anticipa el rumbo que pretenden imprimirle a las manifestaciones que se insinuaron desde el domingo. Gestar la mayor convulsión social posi-

ble para instalar internacionalmente la “necesidad de ayuda humanitaria” para un pueblo “oprimido por su gobierno”, forzar así una desestabilización política y habilitar la posibilidad de una intervención imperialista que sepulte de una vez por todas la revolución que ha desvelado a la Casa Blanca desde 1959.

Es correcta la caracterización que hizo el presidente Díaz Canel tras recorrer las calles de uno de los epicentros de las protestas. Definió tres grupos bien diferenciados: revolucionarios afectados por la difícil situación, personas influenciadas por la propaganda injerencista que llega desde Miami, y un núcleo provocador de contrarrevolucionarios. Incluso reconoció “un nivel de insatisfacción que, unido a problemas acumulados que no hemos podido resolver y que venían desde el periodo especial, se unen a una feroz campaña mediática de desacreditación como parte de la guerra no convencional que trata de fracturar la unidad entre Partido-Estado-Pueblo”. Frente a esto convocó a defender la Revolución en las calles: “a la revolución la defendemos los revolucionarios, y en la primera fila, los comunistas”. La primera demostración de respaldo fue el lunes, y este miércoles se prevé una movilización masiva, con repercusión en muchas ciudades del mundo.

El injerencismo yanqui en Cuba es más viejo que la Revolución. Cambia de formas, métodos y ropaje, fracasa una vez tras otra, pero no deja de intentarlo. El propio presupuesto federal de los Estados Unidos dispuso en 2020 más de 30 millones

de dólares para financiar la actividad contrarrevolucionaria tanto dentro como fuera de la isla. Y por fuera de los números oficiales están los enormes aportes a ONG's como la "Fundación para la Democracia Panamericana" y su iniciativa "Cuba Decide", cuyas banderas se han visto flameando en las concentraciones de estos días. La preocupación estadounidense y de sus aliados por asuntos humanitarios en Cuba, contrasta con su silencio cómplice con auténticos violadores seriales de los DDHH como son los regímenes de Arabia Saudita, Ucrania o Israel. El pueblo cubano y su Revolución se han ganado con su ejemplo y práctica de solidaridad antiimperialista durante 62 años, el respeto y el cariño de amplias masas en todo el mundo, y particularmente en América Latina. En este respaldo, que debe expresarse en las calles, se apoya la confianza de los revolucionarios cubanos en imprimirle una nueva derrota al imperialismo estadounidense.



Al cierre de esta edición, nos enteramos del fallecimiento de la compañera Blanca, integrante de la CUBa-MTR de Matanza. Le enviamos un abrazo militante a su familia, sus amigos y compañeros.

Compañera Blanquita, en el día de tu partida reafirmamos nuestro compromiso de servir al pueblo y de seguir luchando hasta que el poder este en manos de la gente trabajadora, humilde y luchadora, como fuiste vos.
¡Hasta la victoria siempre!

**¡PROLETARIOS Y PUEBLOS DE TODOS LOS
PAÍSES OPRIMIDOS... UNÍOS!**